



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SÉPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA
NORTE DE SANTANDER**

San José de Cúcuta, veintinueve (29) de julio de dos mil veinte (2020)

PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
RADICADO: 54-001-31-03-007-2014-00068-00
DEMANDANTE: ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS como
cesionario de DAVIVIENDA S.A.
DEMANDADO: RONAL BARBOSA ROJAS

Previo a referir los argumentos que serán analizados en esta etapa procesal, es del caso señalar que el expediente ingreso al Despacho desde el pasado 25 de julio 2019. Siendo evidente que, desde tal fecha, ciertamente ha transcurrido un excesivo termino para resolver lo pertinente, sin embargo, la suscrita debe precisar que tan solo desde el pasado 16 de enero del año que avanza, tomo posesión como titular del Despacho, no siendo por ende atribuible la mora antes descrita, y respecto del cual ya se dio inicio a las acciones disciplinarias del caso. Máxime cuando en atención a acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, y PCSJA20-11528 del mes de marzo del año 2020, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546 del mes abril de 2020 y demás, se adoptaron medidas de suspensión de términos judiciales y se adoptaron medidas por motivos de salubridad pública

ANTECEDENTES RELEVANTES

La Sociedad Abogados especializados en cobranzas S.A., incoó demanda ejecutiva contra Ronal Barbosa Rodríguez. La demanda fue admitida, librándose el respectivo mandamiento de pago en auto del 4 de abril de 2014. Posteriormente y por auto del 13 de octubre de 2015, el Despacho dispuso emplazar al demandado, para luego y en auto del 8 de septiembre de 2017, designar al doctor Luis Aurelio Contreras Garzón como curador ad litem del demandado.

En audiencia pública practicada el 14 de agosto de 2018, se dictó sentencia, en donde se declaró probada la excepción de prescripción de la acción cambiaria y por ende la terminación del proceso. Decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial en providencia del 13 de mayo de 2019, condenándose igualmente a la parte demandante en las costas de segunda instancia. Profiriéndose el 6 de junio de 2019, auto de obediencia y cumplimiento, fijándose igualmente agencias en derecho.

La Secretaria del Despacho, efectuó liquidación de las costas de primera y segunda instancia, el 26 de junio de 2019, por valor de \$5.832.109. y posteriormente en auto del 3 de julio de 2019, el Despacho imparte aprobación de tal liquidación, por no haberse hecho reparo alguno. Proveído que fue notificado por estado del 4 de julio de 2019.

La parte demandante, por conducto de su apoderado judicial, presentó el 9 de julio de 2019, recurso de reposición contra la aprobación de costas. Del cual se corrió traslado, en fijación en lista del 16 de julio de 2019.

Finalmente, en memorial del 5 de diciembre de 2019, el curador ad litem de la parte demandante, doctor Luis Aurelio Contreras Garzón, informa al Despacho sobre la imposición de sanción disciplinaria en su contra, contentiva a su inhabilitación como profesional en derecho desde el 31 de octubre de 2019. Advirtiendo igualmente, la necesidad de interrumpir el presente proceso.

DE LA INTERRUPCION DEL PROCESO

Ciertamente y conforme lo dispone el artículo 159 del C.G.P., la suspensión del ejercicio de la profesión de abogado, es causal para interrumpir el proceso. Y de conformidad con la consulta hecha a la base de datos del Consejo Superior de la Judicatura, el doctor Luis Aurelio Contreras fue objeto de sanción disciplinaria consistente a seis meses de suspensión del ejercicio profesional, con fecha de inicio 31 de octubre de 2019 y final 29 de abril de 2020.

En ese sentido, el Despacho decretara que, para todos los efectos judiciales, el proceso, la interrupción del proceso operó durante el periodo antes descrito. No obstante, como dicho periodo ya feneció, debe entenderse reactivado el proceso. Y por ende se procederá a resolver el recurso presentado por la parte demandante.

ARGUMENTOS DE CENSURA

Señala el recurrente que las costas procesales, obedecen a los gastos en los que incurre el Despacho o las partes en la tramitación del proceso, incluyendo gastos de notificaciones, copias y demás derivados de las actuaciones procesales.

Trae a colación la providencia dictada dentro del proceso 110010203000-2006-00492-00, en donde la Corte Suprema de Justicia, señala que la fijación de las agencias de derecho debe atender a criterios objetivos y subjetivos, donde se tenga en cuenta la gestión realizada por el profesional en derecho que realizó la defensa técnica de los demandados.

Además, precisa que el extremo pasivo está representando por un curador ad litem. Quien de conformidad con el artículo 48 del C.G.P., debe desempeñar el cargo de manera gratuita. No abriendo mérito para imponer las agencias en derecho. Pues estas obedecen a las erogaciones en que incurrió el vencedor, al contratar los servicios de un profesional que ejerciera su vocería. Lo que no ocurre en los asuntos en los que actúa un curador ad litem

CONSIDERACIONES

El artículo 366 del C.G.P., dispone en su numeral 5, que la liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que las apruebe.

Así mismo, la norma describe que las costas y agencias en derecho son liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia. Señalándose igualmente que el Secretario efectuará la liquidación, correspondiendo al Juez aprobarla o rehacerla. Criterios que fueron cumplidos por este Despacho, de acuerdo con la reseña hecha en líneas anteriores.

Ahora bien, en lo que atañe a la liquidación hecha por la Secretaria y aprobada por el Despacho, debe precisarse que en esta únicamente se incluyeron como montos, las agencias en derecho fijadas en primera y segunda instancia. Encontrando igualmente que la fijación de estas agencias, se encuentra ajustada al acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016.

Sobre las manifestaciones hechas por el recurrente sobre la falta de mérito para exigir el pago de las agencias en derecho, habida cuenta que el extremo pasivo está representado por un curador ad litem. Circunstancia que la parte demandante considera imposibilitar la fijación de las agencias en derecho. Debe el Despacho precisar que el artículo 365 del C.G.P., impone el deber a los operadores de justicia, de imponer condena a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso. Condena que incluye tanto las expensas procesales, siempre y cuando las mismas se hayan causado y resulten comprobadas, así como

las agencias en derecho. Sin que exista en el estatuto procesal, excepción o prohibición de esta condena en los asuntos en los que la defensa de la parte favorecida se haya ejercido por parte de la figura del curador ad litem. Igualmente, tampoco existe manifestación alguna por parte del Consejo Superior de la Judicatura, frente a este tema, en el acuerdo PSAA16-10554 de 2016, en donde se fijan las tarifas de agencias en derecho.

Ahora bien, el Despacho no desconoce que de conformidad con el artículo 48 del C.G.P., el desempeño del cargo de curador ad litem es de manera gratuita y por ello, ya no hay lugar a fijar honorarios en favor de este. Lo que de ninguna manera se está contravirtiendo en esta actuación. Aclarándose al recurrente que, pese a que habitualmente se les ha atribuido a las agencias en derecho, únicamente el valor de los honorarios del apoderado judicial. Lo cierto es que ello ha sido desvirtuado en pronunciamiento hecho por la Corte Constitucional en sede de control constitucional, específicamente la Sentencia C-539 de 1999,

*“Las costas pueden ser definidas como aquella erogación económica que corresponde efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial. Esta carga económica comprende, por una parte, las expensas, es decir, todos aquellos gastos necesarios para el trámite del juicio distintos del pago de apoderados (honorarios de peritos, impuestos de timbre, copias, gastos de desplazamiento en diligencias realizadas fuera de la sede del despacho judicial, etc.) y, de otro lado, **las agencias en derecho, correspondientes a los gastos efectuados por concepto de apoderamiento, las cuales - vale la pena precisarlo - se decretan en favor de la parte y no de su representante judicial.** Aunque las agencias en derecho representan una contraprestación por los gastos en que la parte incurrió para ejercer la defensa judicial de sus intereses, es el juez quien, de manera discrecional, fija la condena por este concepto con base en los criterios establecidos en el artículo 393-3 del Código de Procedimiento Civil (**tarifas establecidas por el Ministerio de Justicia o por el colegio de abogados del respectivo distrito y naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el representante judicial o la parte que litigó personalmente**). **Dicha condena no corresponde, necesariamente, a los honorarios efectivamente pagados por la parte vencedora a su apoderado.**”*

Posición que fue reiterada en Sentencia T-625 de 2016. En ese sentido, no resulta entonces inapropiado emitir la correspondiente condena, objeto de controversia por la parte demandante. Pese a que ciertamente no existan honorarios o retribución que deba pagarse por la defensa jurídica hecha por el doctor Luis Aurelio, dada su condición de curador ad litem de la parte ejecutada y vencedora del proceso.

Mayor soporte de lo anterior es que el mismo artículo 366 del C.G.P. en su numeral 3°, describe que la liquidación debe incluir entre otras, las **“agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado.”** Circunstancia en la que claramente, también podría alegarse que no existe causación de honorarios.

Aunado a lo anterior, recuérdese que las agencias en derecho se conceden en favor de la parte vencedora, en este caso el ejecutado, mas no en favor de su apoderado judicial o en este caso al Curador. Y es por ello que la posible ejecución de estos valores reposa en favor de la parte mas no del profesional en derecho. Lo que denota que, de ninguna manera, la condena impuesta puede llegar a desconocer o actuar de manera contraria a la exigencia del numeral 7 del artículo 48 del C.G.P., consistente a la actuación gratuita del curador ad litem. Pues el artículo 56 del estatuto procesal, despoja al curador ad litem designado, de la facultad de recibir. Lo que del todo hace evidente la imposibilidad del curador de reclamar esta condena en su favor.

Por lo advertido, el Despacho considera que no existe mérito para considerar la modificación ni supresión de la liquidación hecha por la Secretaria. Motivo por el cual el Despacho, confirmará el auto del 3° de julio de 2019.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cucuta,

RESUELVE

PRIMERO: ENTIENDASE que durante el periodo del 31 de octubre de 2019 al 29 de abril de 2020 operó la interrupción del presente proceso, en atención al numeral 2° del artículo 159 del C.G.P.

SEGUNDO: ENTIENDASE levantada la interrupción del proceso desde el 30 de abril de 2020, por haberse superado el hecho que origino la interrupción.

TERCERO: NO REPONER el auto del 3° de julio de 2019, por las razones expuestas en este proveído.

CÓPIESE Y NOTIFÍQUESE

**FIRMA ELECTRÓNICA
ANA MARÍA JAIMES PALACIOS
JUEZ**

CT/AMJP

República de Colombia
Rama Judicial



Page 1 of 2

Consejo Superior de la Judicatura
Sala Jurisdiccional Disciplinaria

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
DE ABOGADOS

LA SUSCRITA SECRETARIA JUDICIAL
DE LA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA
DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Certificado No. 440421

CERTIFICA :

Que revisados los archivos de antecedentes de esta Corporación así como los del Tribunal Disciplinario; aparecen registradas las siguientes sanciones, contra el (la) doctor(a) **LUIS AURELIO CONTRERAS GARZON** identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 88208167 y la tarjeta de abogado (a) No. 85599

Origen : CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA CUCUTA (NORTE SANTANDER) SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

No. Expediente : 54001110200020160053801

Ponente : CARLOS MARIO CAÑO DIOSA

Fecha Sentencia: 30-Ago-2019

Sanción : Suspensión

Días: 0 Meses: 6 Años: 0

Inicio Sanción: 31-Oct-2019

Final Sanción: 29-Abr-2020

Norma	Número	Año	Artículo	Paragrafo	Númeral	Inciso	Literal	Ordinal
LEY	1123	2007	33		8			

Consejo Superior
de la Judicatura

Las sanciones que no tengan fecha en que comienzan a regir no han sido comunicadas por el registro nacional de abogados.

Este certificado no acredita la calidad de abogado.

Nota: Si el No. de la Cédula, el de la Tarjeta Profesional ó los nombres y/o apellidos, presentan errores, favor dirigirse al Registro Nacional de Abogados.

La veracidad de este antecedente puede ser consultado en la página de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co en el link Certificado de Antecedentes Disciplinarios.

87

Bogotá, D.C., DADO A LOS DOS (2) DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE (2020)

YIRA LUCÍA OLARTE ÁVILA
SECRETARIA JUDICIAL